



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CIVIL

Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2.024)

MAGISTRADO: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
APELACIÓN DE AUTO: 05001 31 03 015 2019 00217 01

Proceso: Ejecutivo.
Demandante: BANCOLOMBIA S.A.
Demandado: GUILLERMO LEÓN ESCOBAR SALAZAR.
Extracto: Se configuró el lapso temporal que prevé el literal b) numeral 2° del artículo 317 del C. G. del P., y como no se observa actuación que lo interrumpa, procede el desistimiento tácito. Confirma.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve el recurso de apelación formulado por la demandante, contra el auto calendado el catorce (14) de agosto de dos mil veintitrés (2.023), proferido por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS de Medellín.

ANTECEDENTES

El 5 de junio de 2.019 se libró mandamiento de pago en favor de BANCOLOMBIA S.A. y contra GUILLERMO LEÓN ESCOBAR SALAZAR¹, quien como una vez notificado no pagó ni propuso excepciones, el 3 de septiembre siguiente (2.019) se ordenó seguir adelante con la ejecución², pasando el asunto a ejecución, donde el

¹ Ver archivo 04 del Cuaderno Principal.

² Archivo 10 ídem.

correspondiente Despacho el 29 de octubre de 2.020 avocó conocimiento del asunto³, decisión notificada por estados del 5 de noviembre se ese año.

Mediante el auto recurrido se decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito, para lo que después de hacer un recuento procesal y aludir a las normas que rigen el tema, argumentó que “... *la última actuación tuvo ocurrencia, el 29 de octubre de 2020 (cfr. fl 51 C01)*”, por lo que ausente cualquier tipo de actuación procesal del demandante dentro del término legal, procede declarar el desistimiento tácito de manera oficiosa.

Frente a esa decisión la actora presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación, refiriendo que la disposición aplicada es subjetiva en los procesos con sentencia conforme la sentencia C-553 de 2.016 de la Corte Constitucional, y como el asunto se impulsó hasta el fallo, se desconocería el derecho cierto sobre una obligación clara, expresa y exigible, así como el acceso a la administración de justicia y el debido proceso⁴.

En decisión del 25 de septiembre de 2.023 se resolvió negativamente el recurso horizontal, indicándose que lo normal es que la pretensión ejecutiva termine por pago, pero puede ocurrir que culmine anormalmente como en este caso, ya que no existen actuaciones posteriores al 5 de noviembre de 2.020 tendientes a impulsar la ejecución o relacionadas con medidas cautelares, menos la actualización del crédito, las que son del resorte de la actora.

Agregó que la terminación del proceso es acorde con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia (STC11191-2020), quien unificó la

³ Archivo 19 en igual cuaderno.

⁴ También citó auto de este Tribunal del 4 de julio de 2.017 en el radicado 2007 00072 04.

jurisprudencia respecto a la regla contenida en el literal “C” del artículo 317 del C. G. del P., en cuanto a que la actuación para interrumpir el término “*debe ser apta y apropiada para impulsar*”, situación que aquí no ocurrió; al contrario, el expediente permaneció inactivo por más de dos (2) años, por lo que la decisión proferida no es violatoria de ningún precepto constitucional. Subsidiariamente concedió la apelación.

Así las cosas, como se trata de un auto apelable según lo normado por el literal “e” del numeral 2° del artículo 317 procesal civil, se procede a resolver la alzada tal como lo prevé el artículo 326 ibídem, previas:

CONSIDERACIONES

El recurso de apelación busca que el Superior estudie el asunto decidido en primera instancia, con el fin de revocarlo o reformarlo, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis, ello dentro del principio de la limitación que impone el artículo 328 del C. G. del P..

El artículo 317 procesal civil, deja en claro los eventos en los cuales procede la figura del desistimiento tácito. Tales circunstancias son:

1. Cuando estando pendiente una actuación a cargo de la parte y se le requiere para que la realice en el término de treinta (30) días (numeral 1°)⁵.
2. En el evento que permanezca inactivo por un año en la secretaría, sin necesidad de requerimiento previo (numeral 2°).
3. Tratándose de un proceso con sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto para la terminación

⁵ Valga anotar que el juez no puede ordenar ese requerimiento cuando estén pendientes actuaciones dirigidas a consumir las cautelas.

anormal será de dos (2) años (literal B numeral 2°). Ello sin requerimiento previo.

Valga anotar que el literal “C” del numeral 2° del mismo artículo 317, aclara que: *“Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo”*, situación en la que no nos detendremos, ya que no es alegada por el recurrente.

En el caso *sub-examine*, el sustento a la decisión atacada es el tercer supuesto, es decir, que existiendo orden de seguir adelante la ejecución (del 3 de septiembre de 2.019), el proceso estuvo *“inactivo”* por más de dos (2) años.

De cara a ese concepto de *“inactivo”*, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado:

“... la expresión «inactivo» a que hace alusión la norma mencionada, debe analizarse de manera sistemática y armónica con lo preceptuado en el literal «c» del mismo canon, según el cual «cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo».

“Una sana hermenéutica del texto legal referido, indica entonces, que para que podamos considerar que un expediente estuvo «inactivo» en la secretaría del despacho, debe permanecer huérfano de todo tipo de actuación, es decir, debe carecer de trámite, movimiento o alteración de cualquier naturaleza y ello debe ocurrir durante un plazo mínimo de un año, si lo que se pretende es aplicarle válidamente la figura jurídica del desistimiento tácito”. Subrayado en el texto, sentencias STC14997-2016, STC1578-2018 y STC7488-2020.

Entonces, este particular escenario implica que el proceso carezca de trámite, entiéndase cualquier actuación, durante como mínimo dos (2) años, donde en el caso en estudio se constata que el 29 de octubre de 2.020, el juzgador de ejecución, avocó el conocimiento de este asunto, decisión que fue notificada por estados el día 5 de noviembre de ese año (2.020), siendo ésta última fecha la que se considera.

De otro lado, sin ninguna actuación de por medio, el desistimiento tácito se decretó mediante la providencia recurrida (14 de agosto de 2.023), es decir, entre citadas fechas pasaron dos (2) años, nueve (9) meses y nueve (9) días, superándose con creces el término exigido por el literal B numeral 2° del artículo 317 procesal civil.

El recurrente pretendiendo se continúe con el trámite del asunto, citó a esta Corporación y a la Corte Constitucional (sentencia C-553 de 2.016), aduciendo que la figura aplicada es subjetiva en los procesos con sentencia, punto con el que, en principio, coincide la Sala, pues el ámbito de aplicación de la terminación anormal es “*omnicomprensivo*”⁶, siendo claro que no se trata de una aplicación rígida, sino, de una actuación razonada que considere en conjunto lo actuado.

No obstante, según otrora se expuso, este asunto estuvo sin actuaciones entre el 5 de noviembre de 2.020 y el 14 de agosto 2.023, y si bien es cierto que se adelantó hasta el auto que ordenó seguir con la ejecución, también lo es que la actora no desplegó gestión alguna en procura de impulsar el trámite, por lo que resulta pertinente hacer cita del precedente jurisprudencial dimanado de la Sala Civil de la Corte

⁶ Sobre tal punto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en reciente pronunciamiento (STC13560 del 6 de diciembre de 2.023) expuso: “De igual forma, la Corte distinguió el primer numeral del 317 como una causal subjetiva, mientras que el segundo numeral, estudiado en este caso, como una tendencialmente objetiva, pues requiere del paso del tiempo sin atender a requerimientos judiciales, ni gestiones distintas a lo ya reseñado en precedencia: “*La Corte ha señalado sobre la materia que, en cualquiera de las modalidades del desistimiento tácito vigente, esto es, tanto el que podría denominarse subjetivo con requerimiento previo (núm. 1), o el tendencialmente objetivo a decretar de plano (núm. 2), cierto es que el ámbito de aplicación de la figura se aprecia notablemente omnicomprensivo. Efectivamente, el supuesto inicial refiere a ‘cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte’, al tiempo que la hipótesis posterior, con mayor amplitud, atañe a ‘cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas’; fórmulas con las que el legislador confirió al desistimiento tácito un alcance casi absoluto en lo que atañe a la naturaleza de la tramitación.* (AC081-2022).” *Cursiva en el texto original.*

Suprema de Justicia, que sobre la actuación “*apta y apropiada*” en un asunto ejecutivo, dijo:

“... tratándose de “un coercitivo con «sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución», son aquellos encaminados a “satisfacer la obligación cobrada”, pues solo así se evitará la parálisis procesal y la congestión judicial que esa herramienta pretende conjurar (STC11191-2020). (...)

“Por otra parte, cuando existe auto o sentencia que ordena seguir adelante la ejecución y la única medida cautelar practicada es un embargo de remanentes, no es cierto que el libelista se quede sin la posibilidad de cumplir actos idóneos para el fin que persigue, esto es, satisfacer su acreencia, o que estos se reduzcan a la liquidación del crédito o su actualización, pues puede pedir otras cautelas e incluso solicitar al sentenciador, que conforme al numeral 4° del artículo 43 del Código General del Proceso, identifique y ubique bienes del ejecutado. También puede reclamar al juez de conocimiento que requiera al otro servidor para que lo mantenga al tanto del estado de los bienes embargados, y, en general, adopte las medidas dirigidas a que la cautela tenga buen suceso.” STC6380-2.021.

Así las cosas, lo argumentado por la recurrente está llamado al fracaso, pues en las presentes, incluso, existe un embargo de remanentes⁷, por lo que el interesado, entre otras cosas, pudo aportar la actualización del crédito; y, respecto a cautelas, deprecar se oficiara en aras de identificar y ubicar bienes del ejecutado, o cualquier otra diligencia para obtener la satisfacción de lo cobrado.

Entonces, si nada de lo indicado se hizo, la terminación es acertada, sin que ello se traduzca en una afectación fundamental, pues la naturaleza del desistimiento más que pretender una sanción, busca atender a la necesidad de conjurar la “*parálisis de los litigios*”⁸.

⁷ Ver archivos 03, 07 y 09 en el cuaderno de medidas cautelares.

⁸ En la STC11191-2020 se explicó: “Mucho se ha debatido sobre la naturaleza del «desistimiento tácito»; se afirma que se trata de «la interpretación de un acto de voluntad genuino, tácitamente expresado por el solicitante» de «desistir de la actuación», o que es una «sanción» que se impone por la «inactividad de las partes». Su aplicación a los casos concretos no ha sido ajena a esas concepciones; por el contrario, con base en ellas se ha entendido que la consecuencia solo es viable cuando exista un «abandono y desinterés absoluto del proceso» y, por tanto, que la realización de «cualquier acto procesal» desvirtúa la «intención tácita de renunciar» o la «aplicación de la sanción». No obstante, quienes allí ponen el acento olvidan que la razón de ser de la figura es ajena a estas descripciones, pues fue diseñada para conjurar la «parálisis de los litigios» y los vicios que esta genera en la administración de justicia. (...) “Por otra parte, la Corte Constitucional, en

Corolario, la decisión impugnada se confirmará.

Sin condena en costas conforme al artículo 365.8 del C. G. del P..

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín;

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto calendado el catorce (14) de agosto de dos mil veintitrés (2.023), proferido por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS de Medellín, según lo motivado.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, vuelva el expediente al Despacho de origen. Sin costas.

Notifíquese:



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO

las oportunidades que ha estudiado la «figura», como «perención» o «desistimiento tácito», ha reiterado que realiza los «principios de diligencia, eficacia, celeridad, eficiencia de la administración de justicia», al igual que la seguridad jurídica, [t]odo esto en el entendido de que la racionalización del trabajo judicial y la descongestión del aparato jurisdiccional, finalidades a las que aporta la decisión de terminar anticipadamente un trámite judicial, contribuyen significativamente a hacer más expedito el trámite de los litigios judiciales (C-173/2019, C/1186-08, C/874-03, C/292-2002, C/1104-2001, C/918-01, C/568-2000).”